

# LyFC: costos y errores

José Luis de la Cruz Gallegos

La decisión de cerrar las operaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) precisa de un debate más allá del netamente económico. Sin lugar a dudas la posición financiera de la empresa era precaria, tan sólo en 2009 los subsidios y transferencias que se canalizaron a la misma por concepto de adquisición de energía eléctrica superaron los 41 mil 900 millones de pesos, situación que sin duda refleja la incapacidad técnica que LyFC tenía para generar por sí misma la electricidad que demandan entidades como el Distrito Federal o el estado de México.

Lo anterior fue el resultado de un incremento en los gastos corrientes de la empresa al mismo tiempo que se descuidaron los canalizados a la inversión, una historia conocida desde los años 80 en todo el sector público. Ya sin subsidios, para 2009 el Presupuesto de Egresos aprobado para LyFC totalizó 33.7 mil millones de pesos, de los cuales 11.8 mil millones (35%) están dedicados a su sistema de pensiones y jubilaciones. La situación es aún más grave cuando se agrega que 12.8 mil millones de pesos del presupuesto van dirigidos a los servicios personales de LyFC, con lo cual es evidente que la mayor proporción de recursos financieros son dedicados a conceptos que no tienen un impacto directo con la generación y distribución de energía eléctrica, o con la innovación tecnológica que en la actualidad debe tener cualquier empresa de este género.

Cuando se toma en cuenta que para inversión física únicamente se aprobaron 6.8 mil millones de pesos (20.2%), y que en general la empresa reporta atrasos en la implementación de los mismos, puede identificarse el yerro histórico que tanto autoridades como sindicato cometieron durante los últimos lustros, principalmente por perder de vista que el verdadero objetivo estratégico de la empresa era el de ser un soporte a las necesidades de energía que tanto la población como la industria del centro del país tienen en sus actividades diarias.

La competitividad y productividad de México dependen de contar con un suministro de energía a precios accesibles y de alta calidad, constante y suficiente para que a partir de ello se puedan tomar decisiones de construcción tanto en materia de vivienda como de empresas, universidades, sistemas de transporte eléctrico o cualquier actividad que reclame como insumo a la electricidad.

Ante las diversas crisis económicas y la debilidad estructural de las finanzas públicas, sólo era cuestión de tiempo para que LyFC entrara como objetivo del reajuste presupuestal, especialmente porque LyFC se volvió dependiente de la compra de energía eléctrica, es decir, se convirtió en intermediario más que en generador, algo que no justifica una nómina de más de 44 mil empleados y 22 mil jubilados. El tamaño de nómina permite establecer que de mantenerse dicha situación los pasivos por pensiones y jubilaciones futuros aumentarían de manera sustancial, abrumando a unas finanzas públicas ya de por sí en problemas. Al comparar el costo de 20 mil millones de pesos para cerrar LyFC con las cifras antes presentadas se tiene evidencia de que la posición oficial difícilmente será negociable.

Bajo este escenario no es difícil de entender que el gobierno haya decidido cerrar a la entidad pública. Además, la debilidad de la estrategia sindical fue evidente cuando no pudo realizar una elección de unidad y con ello evitar la intervención de las autoridades oficiales, evitando con ello el desgaste mediático y político. El error estratégico sindical también se produjo cuando no pudo convertirse en un factor cambio: durante los últimos años debió buscar impulsar medidas para mostrar que su interés también pasaba por mejorar la posición productiva de la empresa, de su tecnología y de la calidad en la atención a los usuarios.

Hoy, el mayor costo de disposición oficial será político y social, fundamentalmente porque el país atraviesa una profunda crisis que ha polarizado las posiciones de los actores. La experiencia de los sucesos políticos recientes ha mostrado que no hemos alcanzado negociaciones que den cauce a los problemas estructurales de México, por lo que el conflicto de LyFC podría convertirse en una nueva etapa en la lucha por el poder.

No puede dejarse de indicar que parte de este resultado es corresponsabilidad de los gobiernos que sucumbieron ante las negociaciones de corto plazo y difirieron para el futuro la reconfiguración de un sector energético que es vital para el crecimiento económico del país. Además, la existencia de empresas públicas y de secretarías de Estado poco eficientes es un común denominador en el gobierno federal, por lo que una vez tomada esta postura sería de esperar que las acciones continúen en el resto, a fin de mostrar que esto forma parte de una estrategia integral con dirección clara y no una decisión aislada.

jldg@itesm.mx

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

